

# Un siglo de protesta y movilización social en Colombia (1919-2020)

## A century of protest and social mobilization in Colombia (1919-2020)

[Artículos de investigación]

Ginneth Esmeralda Narváez Jaimes\*

Recibido: 23 de abril del 2021  
Aceptado: 17 de septiembre del 2021

Citar como:

Narváez, G. (2022). Un siglo de protesta y movilización social en Colombia (1919-2020). *Campos en Ciencias Sociales*, 10(2).  
<https://doi.org/10.15332/25006681.7935>



### Resumen

En el presente artículo se analizan los distintos periodos históricos de las luchas sociales en Colombia. En particular, se caracterizan los principales conceptos para analizar las protestas sociales en el país, se presentan cortes históricos y se aportan elementos metodológicos para profundizar en el estudio de los actores sociales, los conflictos recientes y los derroteros que tiene la acción social, comprendida de manera distinta a la acción colectiva. El trabajo está basado en los libros *Cultura e Identidad Obrera: Colombia 1910-1945* (1991), *Idas y Venidas, Vueltas y Revueltas* (1958-1990) y *Cuando la Copa se Rebosa. Luchas Sociales en Colombia* (1975-2015), de autoría individual y colectiva de Mauricio Archila Neira, y parte de una rigurosa sistematización hecha para el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), así como de una conferencia magistral (2018) impartida por el investigador para la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás, en la cual se analizaron las expresiones históricas de la movilización social en Colombia en el periodo comprendido entre el año 1919 y el 2018. Al final se complementa el recorrido histórico con el abordaje de las manifestaciones populares de los dos últimos

---

\* Investigadora junior, docente de la Universidad Santo Tomás, Facultad de Sociología. Doctora en Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Magíster en Historia por la Universidad Nacional de Colombia. Cursó su pregrado en Ciencia Política en la misma institución. Correo electrónico: [ginnethnarvaez@usantotomas.edu.co](mailto:ginnethnarvaez@usantotomas.edu.co); ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4081-4389>

años, que demuestran una alta movilización social y vislumbran la configuración de nuevas ciudadanías.

**Palabras clave:** movimiento social, protesta social, acción colectiva, Colombia.

## Abstract

This article analyzes the different historical periods of social struggles in Colombia. In particular, the main concepts to analyze social protests in the country are characterized, historical cutoffs are presented and methodological elements are provided to deepen the study of social actors, recent conflicts and the paths of social action, understood differently from collective action. The work is based on the books *Cultura e Identidad Obrera: Colombia 1910-1945* (1991), *Idas y Venidas, Vueltas y Revueltas* (1958-1990) and *Cuando la Copa se Rebosa. Luchas Sociales en Colombia* (1975-2015), individually and collectively authored by Mauricio Archila Neira, and part of a rigorous systematization made for the Center for Popular Research and Education (CINEP, by its Spanish initials), as well as a lecture (2018) given by the researcher to the Faculty of Sociology of the Universidad Santo Tomás, in which the historical expressions of social mobilization in Colombia in the period between 1919 and 2018 were analyzed. At the end, the historical journey is complemented with the approach of the popular demonstrations of the last two years, which demonstrate a high social mobilization and hint the formation of new citizenships.

**Keywords:** social movement, social protest, collective action, Colombia.

## Introducción

A partir de una perspectiva crítica se ponen en evidencia los movimientos sociales más incidentes en Colombia, así como sus agendas sustantivas y la visibilización de sus luchas sociales. Parece un reto sintetizar 100 años de movilizaciones en el país<sup>1</sup>, por lo cual el presente ejercicio parte de tres postulados claves: (1) se toma en cuenta la recurrencia de la lucha social, comprendida como el número de eventos que responden a procesos orgánicos, y no al uso de la fuerza o de la violencia; (2) se parte de la incidencia que posee la organización social constitutiva, que motiva a la elaboración de consensos; y (3) se toma en

---

<sup>1</sup> El siglo XIX no se aborda en el presente artículo porque el tema de movimientos sociales implica la construcción de una serie de procesos que no se habían consolidado como tal sino hasta inicios del siglo XX, y por tanto se estarían forzando de alguna manera las categorías del análisis; por ejemplo, el Movimiento de los Artesanos se hizo muy visible a través de las sociedades democráticas del siglo XIX, pero la conformación de un movimiento social obrero con las características que aquí se proponen solo aparece hasta 1919.

consideración la visibilización de demandas colectivas que responden a carencias estructurales en momentos históricos determinados.

A lo largo del artículo, se resalta la existencia de movimientos sociales que no se expresan como tal en un marco de protestas sociales violentas, sino desde el universo de la civilidad. Por tanto, se evidencia que no todo movimiento social requiere de la protesta violenta para manifestarse, y que no toda protesta social violenta es expresión de un movimiento social.

El ejercicio propuesto, además de presentar una cuantificación, posibilita la comprensión de problemáticas estructurales que no han sido resueltas y que encarnan las limitaciones y desajustes de la sociedad colombiana. Es claro, respecto a la apuesta hermenéutica, que el ejercicio debe sobrepasar los señalamientos y el encasillamiento de los movimientos sociales en términos de polarización.

Los movimientos sociales son racionales y razonables, de ahí que la tarea desde las ciencias sociales sea la comprensión y visibilización de las agendas que motivan su aparición. Así, a partir de Touraine (1989), el análisis se presenta desde los principios de identidad, totalidad y oposición, y, a partir de Tilly (1997), la fuerza de estos movimientos se analiza en relación con el número de personas movilizadas, la capacidad de argumentación y las modalidades utilizadas. Desde ambos enfoques se cuestiona el uso de la fuerza y de las armas, y Tilly, por su parte, exalta la capacidad de posicionamiento institucional de las demandas.

Dada la violencia que ha pervivido en Colombia, esta misma se reconoce como un factor presente en algunos ejercicios de la protesta social, pero que no la valida como acción social colectiva, dado que, al usar la fuerza, se deriva en la imposibilidad de presentación de demandas sustantivas ante el aparato institucional.

Finalmente, el artículo presenta los cortes históricos de estas luchas cuando han sido más fuertes, a la vez que se determinan periodos de visibilización de los distintos actores sociales incidentes, así como de las principales tendencias que ha expresado la protesta social a nivel nacional en el último siglo.

## **Referentes teóricos para la explicación histórica de los movimientos sociales en Colombia**

Los *movimientos sociales* se comprenden como “acciones sociales colectivas permanentes, orientadas a enfrentar condiciones de desigualdad, exclusión o

injusticia y tienden a ser propositivas en contextos espacio-temporales determinados” (Archila, 2003, p. 74), mientras que la *protesta social* se entiende como “un momento de visibilidad en medio de una cotidianidad casi imperceptible” (Archila, 2003, p. 77) que puede generar figuraciones específicas y evidenciarse en “los eventos culturales, los discursos académicos, la presencia en las artes, la eventual participación electoral, así como la inacabable capacidad del cabildeo” (Archila, 2003, p. 77).

Así, se observa que las protestas, las acciones sociales colectivas y las movilizaciones son distintas formas de denominar las expresiones ciudadanas, y que estas luchas o protestas se inscriben en la temática que estudia los movimientos sociales, pero es importante clarificar el horizonte teórico que posibilita el análisis. Por tanto, resulta pertinente diferenciar entre la *acción colectiva simple*, que se define como una “acción conjunta de individuos para la defensa de sus intereses comunes” (Revilla, 1996, p. 3), y la *acción social*, que se diferencia por su permanencia en el tiempo, por su expresión concreta en términos espaciales y temporales (Escobar, 2010), por su posicionamiento público, y por su capacidad de enunciación de demandas colectivas, en las que deben aglutinarse más de diez individuos organizados.

Asimismo, los movimientos sociales tienden a ser propositivos (Archila, 2003, p. 74) y trascienden la denuncia tradicional, y en ellos se toman en cuenta las acciones sociales contenciosas, que buscan afectar la conducta de los antagonistas. Estas acciones sociales son comprendidas como acciones extrainstitucionales y están caracterizadas por ser expresión de conflictos latentes y que de manera no violenta expresan su indignación e inconformismo.

En este sentido, resulta importante clarificar el carácter social de la movilización, dado que el presente análisis trasciende el enfoque de la acción colectiva, comprendida como fenómeno de masas, y acoge el influjo weberiano bajo la noción de *acción social* (Weber, 1978, p. 22), en el sentido que busca interpelar, afrontar la conducta de un Otro, que es antagonista, que por lo común es el Estado, pero que no siempre lo es, “es acción dirigida a los otros, es más que la agregación de voluntades individuales” (Revilla, 1996, p. 3); es resultado de la definición de una identidad colectiva definida como fruto de individuos en interacción y concierne a las orientaciones de su acción, así como al cálculo de oportunidades y restricciones en el que tiene lugar dicha acción social (Melucci, 1989, p. 34).

Ahora bien, los movimientos sociales tradicionales, como el movimiento sindical o el campesino, en su momento se dotaron de organizaciones centralizadas, con junta directiva y con voceros oficiales, pero, de acuerdo con su desarrollo histórico, se observa que los movimientos sociales recientes han procurado mayor horizontalidad, y han optado por modos de organización más federativos y menos patriarcales. Históricamente, la lucha se daba por el nivel de politización o de cooptación partidista de los movimientos sociales, con el fin de ampliar las bases electorales, pero a medida que se ha modernizado la apuesta programática, se ha variado la relación con el Estado; de ahí que los movimientos sociales adquieran mayor autonomía y mejoren su espacio de interlocución con organizaciones que se disputan la dirección macrosocial e institucional de la sociedad.

A medida que los movimientos sociales se sectorizan, las reivindicaciones sociales, políticas y económicas se diversifican y adquieren un mayor nivel de especificidad y diferenciación de los movimientos políticos, sean estos de orden pacífico o violento<sup>2</sup>. Así, se lucha entonces contra la instrumentalización tradicional que hacían los partidos políticos de los movimientos sociales, sin negar que, según la coyuntura, algunos de ellos decidan cambiar de rumbo y aspiren a una legitimación política por la vía electoral.

Por otra parte, los movimientos sociales se pueden analizar desde el enfoque de *oportunidad política* (Tarrow, 1998), una propuesta que se deriva de la teoría de movilización de recursos, que se centra en analizar “la evolución y los resultados obtenidos a través de la acción colectiva” (Gamson y Meyer, 1999, p. 392), pero que posee un alcance limitado respecto a las condiciones que posibilitan que un movimiento social logre sus objetivos. No obstante, con Gamson y Meyer (1999) se incorporó una variable cultural al análisis meramente institucional que amplió el campo de los objetivos políticos, con el fin de analizar las condiciones que se presentan para que un movimiento social perviva en el tiempo o desaparezca.

En el enfoque de *oportunidad política* se ubican dos entradas analíticas posibles: una tiene que ver con los espacios políticos que se dan en un contexto específico para que el movimiento social se exprese y se posicione, y la otra introduce la lectura institucional respecto a las oportunidades que tiene el establecimiento; así, en términos generales, se integran factores tanto culturales como políticos.

---

<sup>2</sup> Un ejemplo más o menos reciente de este cambio de lógica organizativa en Colombia lo expresó la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), que en el año 2011 logró derrotar un proyecto de reforma al sistema educativo superior y contó con una organización más horizontal que, a pesar de tener voceros, no fue tan vertical como era tradición.

Los movimientos sociales pueden ser revolucionarios o reaccionarios (Archila, 2003, p. 75), ayudan a clarificar políticamente el panorama social, y poner en público los conflictos de diverso orden y las limitaciones de la sociedad; en ese sentido, no son ni buenos ni malos, se expresan porque existe una sociedad imperfecta con desajustes, desequilibrios e injusticias; son expresiones mixtas de orden emocional y racional. Normalmente, la protesta social se organiza y se planea desde un orden de necesidad racional, pero lo afectivo hace parte de la acción colectiva, y en términos reales, el cálculo rebasa la realidad; de ahí que siempre se requiera contemplar un posible desenlace en donde se exacerbe el conflicto y se derive en un enfrentamiento que pueda llegar a ser violento. Pero, en principio, los movimientos sociales no son violentos *per se* (Archila, 2003).

Asimismo, mientras que los movimientos sociales son proactivos, la protesta social es reactiva, pero, de acuerdo con el sociólogo histórico norteamericano Charles Tilly, es importante diferenciar ambos repertorios: por una parte, los movimientos proactivos buscan la “conquista de algún derecho que no existe antes” (García Linera, 2010, p. 23); y, por otra, las acciones reactivas “tienen que ver con acciones de protesta dirigidas a resistir la intromisión de fuerzas externas en el control de los recursos colectivos” (García Linera, 2010, p. 23), o a responder espontáneamente en caso de vulneración de derechos.

Otra de las características de los movimientos sociales es que estos proponen la estructuración de agendas, a la vez que son programáticos y posibilitan la resolución de conflictos por medio de respuestas sociales orientadas a ello, y a partir de articulaciones colectivas que se dan en contextos espaciotemporales concretos<sup>3</sup>.

En Colombia, el análisis de los movimientos sociales posee una altísima influencia de Alan Touraine, sociólogo francés que aborda el análisis de los movimientos sociales a partir de tres elementos: identidad, oposición y totalidad (Touraine, 2006, p. 259). Según esto, se parte entonces del reconocimiento de *identidades* colectivas comprendidas como los modos de autodenominación y autodeterminación de los movimientos sociales, es decir, “características políticas, económicas, históricas y culturales que identifican a los miembros de la organización” (García Linera, 2010, p. 25); así como de la *diferenciación* entre

---

<sup>3</sup> No es lo mismo el movimiento de los Comuneros en 1781 que el movimiento de los Artesanos del siglo XIX, o que los orígenes de la clase obrera en el siglo XX, o que los nuevos movimientos sociales de mediados de siglo XX. Cada coyuntura histórica es específica y marca una correlación de fuerzas y situaciones de conflicto particulares que se van diferenciando a lo largo de la historia.

“nosotros” y “ellos”, de acuerdo con una clara ubicación de “adversarios unificadores” y de los niveles de contradicción con ellos (García Linera, 2010, p. 25); y de la *totalidad*, entendida como el discurso en el que se exponen los argumentos y la justificación de la lucha, así como las reivindicaciones — inmediatas, de mediano y de largo plazo—, las aspiraciones transformadoras, y el nivel de alcance —ya sea institucional, local, nacional e incluso global—.

Otra característica notable de los movimientos sociales la aporta Charles Tilly (1997), quien afirma que la fuerza del movimiento social radica en el número de participantes, los argumentos y las modalidades de protesta, y que, por tanto, no está en el poder de las armas. Según esto, los movimientos sociales por definición tienden a tener una dinámica civilista, de negociación y de construcción de acuerdos, en donde su fuerza no está en las armas, sino en el número de ciudadanos movilizados y en sus argumentos (Tilly, 1997). En el caso colombiano, cabe reconocer que la violencia ha estado presente todo el tiempo, ya sea afectando los movimientos sociales o impactando su expresión. Respecto a este punto, es importante destacar que el presente análisis no se centra en el número de personas movilizadas como plantea Tilly, sino que se concentra en el número de eventos ocurridos en un periodo histórico determinado y en las modalidades de expresión de los mismos.

Por otra parte, se afirma también que la protesta social, a diferencia del movimiento social, es una expresión de corta duración. En este sentido, no toda protesta social expresa un movimiento social —esto está determinado por el nivel de organicidad—, y no todo movimiento social se expresa en protestas sociales. Hay movimientos sociales, como el feminista o el movimiento LGBTIQ, que no suelen acudir mucho a la protesta social, sino que privilegian otros mecanismos de concertación —el *lobby*, por ejemplo—, estrategias culturales y la búsqueda de reconocimiento académico (Gómez, 2011), lo cual ha derivado en la concertación de propuestas por la vía institucional, en el reconocimiento de soberanías específicas que se desenmarcan del discurso de la soberanía nacional, en la formalización de estudios de posgrado, en reformas normativas puntuales, fallos jurídicos específicos, o en la consolidación de expresiones culturales de diverso orden.

Pero, por otra parte, también se pueden encontrar otros movimientos que han sido mucho más contenciosos y acuden de manera sistemática a la protesta y a la confrontación con el fin de impactar la gobernabilidad, medir la correlación de fuerzas y presionar la institucionalidad para lograr sus fines. El riesgo de esta

práctica consiste en que pueda mutar hacia la protesta violenta y se desconfigure la lucha social inicialmente proyectada.

Desde este punto, algunos movimientos sociales plantean demandas públicas al Estado o a los antagonistas privados, pero esta es solo una forma de visibilidad, no la única. No toda protesta se pacta en un movimiento social, ni todo movimiento social acude a la protesta. En las universidades públicas, en algunas ocasiones se ha observado la existencia de enfrentamientos violentos desarticulados que no responden a fechas históricas del movimiento estudiantil y no poseen una agenda política clara<sup>4</sup>, en este caso, este tipo de acciones se clasificarían como protesta violenta sin movimiento social que lo sustente. En contraste, se pueden advertir demandas sociales institucionalizadas de movimientos sociales que no motivan protestas previas como mecanismo de visibilización.

Teniendo como base el marco conceptual arriba expuesto, el presente análisis se realiza a partir de la base de datos construida por varios investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), la cual se organiza desde un referente histórico, referenciando las distintas luchas sociales en Colombia desde 1975, por medio de información de prensa; adicional a ello esa información se contrastó con las voces de los actores y con los comunicados de las organizaciones sociales.

## **Formación de los movimientos sociales: un país que se organiza y se levanta (1919-1929)**

A un siglo de la Marcha de los Sastres, llevada a cabo el día 16 de marzo de 1919, que derivó en una inesperada reacción del Batallón Guardia Presidencial en la que se reprimió por la fuerza a un levantamiento de los obreros adscritos al sector textil, resulta importante revisar la movilización de los diferentes sectores sociales y el precedente que, con esta, se marcó para el movimiento obrero.

Para ese momento, los sastres ya estaban agremiados y el balance que arrojó la protesta social fue de 20 trabajadores asesinados, 18 heridos y más de 300

---

<sup>4</sup> En una época se hablaba de los "aeróbicos revolucionarios", que consistían en expresiones violentas que no tenían ningún derrotero político y no se podía afirmar que se estaba expresando el movimiento estudiantil como tal.

detenidos que se encontraban en ese momento en la Plaza de Bolívar<sup>5</sup>. La marcha convocada para ese día movilizó alrededor de 4000 trabajadores, y se reconoce como uno de los primeros referentes del movimiento obrero en Colombia.

Posteriormente, en los años 20 se observaron en Colombia los procesos de organización tanto del movimiento obrero como del campesino y el indígena. En el caso de los trabajadores organizados, aún no existían, como tal, organizaciones sindicales, pero sí respuestas gremiales a los desarrollos económicos capitalistas que derivaron en una fuerte explotación a los trabajadores, materializados en pésimas condiciones laborales, ausencia de garantías y derechos, además de un continuo detrimento de la calidad de vida. En 1920 se dieron 32 huelgas en las que no solo se movilizaron obreros del sector de la construcción, del sector ferroviario, de la industria textil, de la industria manufacturera y de la industria extractiva, sino también de la incipiente agricultura moderna (González y Molinares, 2013, p. 177).

A la par del panorama de explotación a los hombres trabajadores, las mujeres obreras no fueron ajenas a esta condición. Por esta razón, lideresas de la industria textil sentaron su voz, al advertir que su afectación también estaba dada por condiciones de género; de ahí que sufrieran maltratos laborales, acoso sexual, excesos en la jornada del trabajo y salarios dispares entre hombres y mujeres. Desde este escenario, se comprende el primer levantamiento de mujeres obreras bajo la dirección de Betsabé Espinal en la fábrica de Tejidos de Bello, en Antioquia<sup>6</sup>.

Después de este levantamiento, los vientos de cambio se vieron venir, pues en 1924 se fundó la Federación de Estudiantes de Colombia (FEC)<sup>7</sup>, y para 1925 se organizó la Confederación Nacional Obrera. En ese momento se advertía la crisis

---

<sup>5</sup> La orden de disparar se dio luego de advertir los brotes violentos de la protesta. Aunque el presidente Marco Fidel Suárez pronunció un discurso desde su balcón, explicando que había revertido la decisión de comprar los uniformes del ejército a Estados Unidos y que iba a privilegiar la producción nacional, su discurso no se alcanzó a escuchar debido a un aguacero muy fuerte que caía en ese momento sobre la ciudad, de acuerdo con Fabio Zambrano (UN Análisis, 2020).

<sup>6</sup> Donde se acordó un aumento salarial del 40 %, regulación del sistema de multas, jornada laboral de 10 horas y más tiempo para el almuerzo, permiso para ir calzadas a la fábrica, y el despido fulminante del "acosador" Velásquez y dos administradores. Para ratificar el acuerdo, una delegación de obreras encabezada por Betsabé Espinal se dirigió a las oficinas de la empresa en Medellín. En la estación del tren las recibió una multitud de unas tres mil personas (Aricapa, 2010).

<sup>7</sup> La FEC promovió la primera manifestación para el 8 de junio de 1929, en la que cayó asesinado el estudiante de derecho de la Universidad Nacional de Colombia Gonzalo Bravo Pérez.

en el sector agrario, de ahí que el movimiento campesino también empezara a organizarse y movilizarse en busca de garantías. Se trató de un periodo de auge de huelgas y protestas sociales a lo largo y ancho del país.

Por estas razones se aborda como un primer periodo histórico el comprendido entre los años 1919 y 1929, lo cual se relaciona con el inicio de la consolidación del capitalismo industrial en Colombia, que es una de las condiciones importantes para que se generaran movimientos sociales como tal. En particular, fueron el incipiente movimiento obrero, el campesino y el indígena los que marcaron la pauta programática.

En la agenda indígena y derivado del influjo de Manuel Quintín Lame<sup>8</sup>, se inició una lucha por el reconocimiento de la autonomía indígena, se reclamó el derecho a la organización y a la participación en política, y se reivindicó la resistencia cultural como referente identitario. Desde este periodo se vislumbra el liderazgo que tuvieron las organizaciones sociales del Norte del Cauca.

La hegemonía conservadora fue el régimen que gobernó en este periodo y no existía para ese momento histórico una legislación laboral garantista ni un marco normativo tendiente a la concertación, por ende, emergió una polarización social muy fuerte. Los conflictos que surgieron se reprimieron de manera tan violenta que parecían más circunscritos en la lógica de las guerras civiles que en el panorama propio de la protesta social. Los peores enfrentamientos ocurrieron en marco de las huelgas que se dieron en los grandes enclaves multinacionales, tales como el petrolero o el bananero, que, como es sabido, derivaron en masacres de trabajadores<sup>9</sup>.

La famosa masacre de las bananeras se dio el 6 de diciembre de 1928, en la que se ha llegado a reconocer que más de 500 personas murieron la noche de la disputa, en contraste con la versión gubernamental que reconoció 13 muertos, porque eran 13 los puntos del pliego de peticiones de los trabajadores de las bananeras. Aun así, aunque la cifra se mantenga difusa bajo la ambigua frase de “un número

---

<sup>8</sup> Líder indígena que inspiró procesos organizativos en el Norte del Cauca, así como el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) de los años 80, organización político-militar indígena que se desmovilizó el 31 de marzo de 1991 (Peñaranda, 2015).

<sup>9</sup> Entre las huelgas más relevantes se debe señalar la de Tropical Oil Company (1924) por mejora de salarios, en la que se despidieron a cerca de 1200 trabajadores. En 1925, en esta misma compañía dos trabajadores que estaban en huelga fueron asesinados bajo permisión y auspicio gubernamental; esta fue la forma de intimidar a 5000 obreros que estaban protestando (González y Molinares, 2013).

indeterminado de muertos”, se debe reconocer que una masacre se contempla técnicamente desde tres muertos en adelante.

Aunque no todas las huelgas de este periodo terminaron en masacre, el nivel de conflictividad fue muy alto y la violencia del momento también fue un factor que caracterizó la represión de las luchas sociales por parte del establecimiento. El régimen conservador no quiso entender el estallido social y procuró negar tanto la aparición de la clase obrera en el país (Archila, 1991) como la conflictividad expresada por los movimientos campesino e indígena.

Las movilizaciones se concebían institucionalmente como fruto de ideas importadas, de agitadores que provenían del exterior, con lo cual se concebía una visión paternalista que desconoció las potencialidades de la ciudadanía organizada (Archila, 1991, pp. 236-237). La elite conservadora, en lugar de procurar la negociación y la resolución de las problemáticas, se dedicó a expedir leyes de expulsión de extranjeros y de control a la migración, y con ello daban por hecho que se calmaría la ola de expresión social. Esto derivó en la conformación de colonias agrarias, federaciones campesinas y organizaciones estudiantiles, así como en la ratificación de las demandas del movimiento indígena y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales. Finalmente, este periodo cerró con la insurrección de los bolcheviques del Líbano, Tolima, fruto de alianzas entre trabajadores urbanos y rurales.

## **Incorporación: organización política sectorial (1930-1945)**

En 1930 se cambió de régimen pacíficamente. El liberalismo asumió el poder, con la figura de Alfonso López Pumarejo en su primer periodo (1934-1938), quien —como presidente— reconoció la existencia del conflicto social en lugar de oponerse o invisibilizarlo. Con esto, trató de canalizar e institucionalizar la protesta social, con el fin de mitigar las células emergentes del liberalismo radical y de los movimientos comunistas que empezaban a manifestarse con expresiones armadas. Bajo su mandato se decretó una legislación laboral consonante con algunas de las demandas del sector obrero<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> A pesar que ya existían antecedentes de proyectos de ley en esa línea. Ya con el asesinato de Uribe Uribe en 1914 se generó un paquete normativo en su honor, que derivó en la ley sobre accidentes de trabajo, otra ley sobre habitaciones obreras que motivó la creación de barrios obreros, y algunas leyes de huelga, pero solo hasta el gobierno de López se logró formular el Primer Código Laboral como tal, que no se reglamentó sino hasta los años 50.

El liberalismo buscó institucionalizar el sindicalismo y los movimientos campesinos que se expresaban en ligas campesinas, así como algunas expresiones del movimiento indígena. Esto es lo que aquí se denomina como *incorporación*: tratar, no de confrontar, sino de integrar, y en gran parte el liberalismo logró su objetivo; aunque por el incumplimiento reiterativo de sus promesas y por el clima de polarización del país —dada la influencia de sectores conservadores que no aceptaron las reformas liberales—, se limitó la ley de tierras y se cerraron espacios a las reformas sociales más relevantes, como lo fue la Reforma Agraria. De ahí que la respuesta por parte de la población haya devenido en la conformación de estructuras armadas y, desde el Gobierno, en la estigmatización de la protesta social.

En cuanto al movimiento estudiantil, se observa un avance sustantivo, pues se reconoció la Ley Orgánica de la Universidad Nacional y se entregó el campus en el que actualmente funciona. Por otro lado, también hubo avances interesantes en el mundo del trabajo, ya que (1) se creó la Confederación de Trabajadores de Colombia, la primera central sindical del país, (2) se pretendió institucionalizar el campesinado, (3) se promulgó la Reforma Agraria de 1936 —aunque se reversó posteriormente en el segundo periodo del mismo López Pumarejo—, y (4) se creó el Ministerio del Trabajo en 1938, pero el liberalismo se quedó corto con la respuesta transformadora y modernizante que requería el país, y, sobre todo en su segundo gobierno (1942-1946), López Pumarejo terminó incumpliendo las expectativas sociales y finalmente renunció en 1945.

En los años que gobernó López Pumarejo se inició el conteo con 19 huelgas anuales, que luego subió a 37-38 por año, lo cual indica que la protesta está asociada a la apertura democrática. En términos generales, si hay un gobierno democrático —incluso de corte reformista—, la movilización y la protesta van a aumentar.

Cabe señalar que el enfoque de estructura de la *oportunidad política* permite comprender este periodo gracias a que en la época se generó cierto ambiente reformista en el que los actores sociales vieron los espacios para justificar la protesta social por la vía institucional; con esto, al disminuir la represión, se dio un resultado favorable a las luchas sociales. Finalmente, en este periodo, las expresiones de protesta bajaron con el gobierno de Eduardo Santos (1938-1942), pero subieron de nuevo cuando retornó López al poder en sus últimos dos periodos de gobierno (1942-1943 y 1944-1945).

Desde una variable cultural, se comprende que esos espacios de reconocimiento a la protesta social derivaron en unos primeros ejercicios organizativos. Gracias a ello, los afrocolombianos, por ejemplo, fundaron el Club Negro en el Valle del Cauca el 21 de junio de 1943, desde donde se estructuraban agendas reivindicativas que los diferenciaron del movimiento indígena y que apuntaron a espacios específicos de representación política, así como al reconocimiento de su resistencia cultural y su autonomía.

## **Represión y violencia (1946-1957)**

Jorge Eliecer Gaitán tuvo la capacidad de recoger el descontento popular con la república liberal y movilizarlo en un sentido político. Desafortunadamente, sus intentos de cambio social fueron frustrados por su asesinato. Este periodo de la primera violencia, que se dio entre 1946 y 1964, fue un periodo donde las cifras de movilización social bajaron de forma importante, incluso hubo años donde no se encuentra mayor referencia a conflictos sociales, sea porque estaban tan reprimidos que no se dieron, o bien porque había un control de prensa y una censura tan fuerte que nunca permitió que se hicieran visibles.

Fue un momento muy duro para los movimientos sociales, sobre todo después del reformismo liberal en el que hubo muy buena movilización y cierta capacidad de generar huelgas y logros importantes, pero al final de los gobiernos de Ospina y Rojas Pinilla hubo una disminución importante de toda la visibilización de la conflictividad social. En 1946 se ubican 24 huelgas, en 1950 solo una, y en 1951 se llevaron a cabo tres; no hay datos de huelgas entre 1952 y 1953. Es claro que, a mayor represión bajo contextos autoritarios, mayores mecanismos de respuesta por parte de la población; “cualquier acción colectiva tiende a ser la autodefensa y sobrevivencia, es decir el tema central es la vida y los derechos humanos” (Garretón, 1996, p. 6).

La movilización social que garantiza espacios democráticos y consensuales se disminuyó en gran medida, y la lucha social se transformó de manera progresiva en un enfrentamiento radical de orden armado. De ahí se comprende el nacimiento de las guerrillas de primera generación en Colombia, que surgieron inicialmente como organizaciones de autodefensa campesina, hasta que fueron configurándose en organizaciones político-militares de orden rural como tal.

Cuando un gobierno autoritario está en el poder, la visibilización del conflicto social disminuye mucho, el régimen es incapaz de contener las demandas sociales, y entonces se va al otro extremo. De lo que pudo ser un periodo de represión o de

disminución de la protesta, de repente surgió una nueva oleada social contra estos regímenes dictatoriales. Posteriormente, como se puede ver con el gobierno de Rojas en 1959, cuando el Frente Nacional asumió el poder del país, se logró cierta retoma de control del orden público, que luego del Bogotazo estaba desbordado, y con esto aumentó también el número de protestas.

## **Recomposición de fuerzas políticas y estructuración de agendas (1958-1974)**

El periodo del Frente Nacional fue un momento en el que se retomó a la democracia, pero en forma limitada, pues como acuerdo bipartidista cerrado, excluyó a todas las fuerzas ajenas al bipartidismo. Por tanto, la oposición, especialmente de izquierda, vio que no tenía oportunidad de participar electoralmente, lo cual reforzó la tendencia que se dio en América Latina desde 1959 —a partir del triunfo de la Revolución Cubana— con la lucha armada. Entonces, aunque se trata de un periodo de recomposición de los movimientos sociales, también fue el periodo del inicio de las guerrillas de primera generación.

En este periodo, Carlos Lleras fue el gobernante más “reformista” en términos prácticos, sin embargo, en 1966 Carlos Lleras se divorció totalmente del movimiento estudiantil, luego de visitar el campus de la Universidad Nacional de Colombia con Nelson Rockefeller con el fin de inaugurar un edificio en el campus. Como parte del rechazo a esta visita se presentaron una serie de enfrentamientos violentos, lo que derivó finalmente en el allanamiento a la Universidad, en la clausura de los Consejos Estudiantiles y en la supresión por la vía normativa de la organización estudiantil que existía para entonces, la Federación Universitaria Nacional (FUN) (Archila, 2003, p. 103).

No obstante, se trató de un periodo importante para los movimientos obrero, campesino, indígena y estudiantil, porque, dado el descontento social y la limitación de las libertades en el Frente Nacional, la expresión social y política se recompuso y dio lugar al auge de luchas sociales, que terminaron expresándose en 1970 y 1971 (Archila et ál., 2019, p. 67). Esta indignación social la logró aglutinar la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que históricamente ha sido una de las organizaciones agrarias referentes en el sector. Para ese momento, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) llegaba a tener setecientos u ochocientos mil afiliados, mientras que la ANUC tuvo más de un millón de afiliados. Para una población que en ese momento no superaba los veinte millones de habitantes, eso fue algo muy representativo. También, el movimiento

estudiantil de estos años tuvo gran importancia y comenzó a incidir junto con el movimiento cívico, el movimiento de los pobladores urbanos, y las organizaciones barriales y comunales.

Entre los años 1971 y 1975 se dio mucha visibilidad a las luchas sociales. De hecho, hubo una fuerte movilización estudiantil. En un primer momento se dio una participación relativamente tranquila de los movimientos sociales, que empezó a subir en 1971. Cabe señalar que el gobierno de Misael Pastrana (1970-1974) fue el último gobierno del Frente Nacional, un pacto de élites políticas en el cual se constató que los gobiernos conservadores tuvieron menos apoyo que los gobiernos liberales; los dos primos Lleras, Alberto Lleras y Carlos Lleras, gobernaron con mucho más margen de apoyo electoral y popular que los dos gobiernos conservadores, de Guillermo León Valencia y Misael Pastrana.

A Pastrana le tocó asumir el desgaste del Frente Nacional y el aumento del apoyo a la ANAPO (Acción Nacional Popular) del General Rojas Pinilla, un nuevo movimiento político que se cree que ganó en las urnas en las elecciones del 19 de abril de 1970, cuando a las ocho de la noche se cancelaron las emisiones de radio y televisión, al momento en que estaba ganando Rojas, y cuatro horas después reaparecieron anunciando a Pastrana como ganador.

Pastrana enfrentó un movimiento político y social cada vez más fuerte. En 1971 inició una oleada de invasiones de tierras especialmente en la Costa Caribe, impulsadas por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC); muchas de las cuales realmente fueron simbólicas. Esto consistía en que los colonos ocupaban un terreno, pero a pesar de ser desalojados por la vía de la fuerza, sentaron el precedente sobre la necesidad de la tierra<sup>11</sup>. En otros casos, las invasiones se dieron como fórmula de recuperación de terrenos que habían sido despojados a campesinos y a indígenas.

Por otra parte, en este periodo también se fortaleció el movimiento obrero, el cual se concentró en una serie de reivindicaciones laborales y una amenaza de Paro Nacional para el 8 de marzo de 1971 que finalmente no se realizó debido a que el gobierno logró negociar. Lo que sí se dio fue un gran movimiento estudiantil bajo la agenda del “programa mínimo estudiantil”. Un claro detonante se dio en el año 1971, dado que se presentó un conflicto en la Universidad del Valle como expresión de rechazo a la presencia de fundaciones norteamericanas en las

---

<sup>11</sup> Para ilustrar el impacto de las acciones promovidas por la ANUC, se debe resaltar que, en un solo día —por ejemplo, el 21 de febrero de 1971—, se dieron más de 600 invasiones de tierras.

universidades públicas, lo cual detonó en una serie de enfrentamientos que terminaron en asesinatos de estudiantes. El clima social se agitó más luego de la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric):

el 24 de febrero de 1971, en Toribío, siete Cabildos e igual número de resguardos indígenas crearon el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), pero no pudo funcionar debido a la represión de los terratenientes y la poca organización. En septiembre del mismo año se realizó en Tacueyó el Segundo Congreso del Cric, en donde se definieron los puntos del programa político cuyas exigencias constituyeron el eje del movimiento y se retomaron enseñanzas de líderes como La Gaitana, Juan Tama y Manuel Quintín Lame. (Cric, 1971)

Las diferentes universidades, tanto públicas como privadas, entraron en huelga, y bajo el programa mínimo se exigía un gobierno universitario con mayor participación estudiantil en los cuerpos colegiados de todas las universidades públicas, en los consejos directivos y en los consejos superiores, así como mejorar la financiación de la educación superior y garantizar la calidad educativa. Curiosamente, el último punto era la apertura de las carreras de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Javeriana, que habían sido cerradas un año antes por un conflicto que se llamó Cataluña.

Un año después, en 1972, se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de Población Negra en Cali, uno de los principales logros organizativos posteriores a los Encuentros Regionales que se habían realizado en Nariño y Valle, en los que se reclamó la invisibilización de las movilizaciones sociales realizadas; se recalcó que no eran registradas por los grandes medios como expresión afro, sino que quedaban englobadas como luchas étnicas. En el Primer Encuentro Nacional se reivindicaron los derechos sociales, políticos y económicos tanto de afros como de raizales, se impulsó la propaganda activista en medios escritos propios —como el Periódico Oiga Sangre, que era una Revista Palenque—, y entre el pliego de peticiones se planteó la necesaria articulación con la agenda global de movimientos afro y minorías étnicas a nivel mundial.

Posteriormente, López Michelsen (1974-1978), hijo de López Pumarejo, otorgó una falsa imagen revolucionaria a su gobierno. No era un reaccionario a ultranza, pero tampoco tuvo una posición favorable frente a la reforma agraria, ni siquiera con relación a los modelos de industrialización. Bajo un discurso revolucionario, dado su tránsito por el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), intentó convencer a la ciudadanía, pero rápidamente mostró sus intereses político-económicos, hasta advertir que en su gobierno se dieron los primeros pasos hacia

el neoliberalismo, que abrieron la participación de la empresa privada en los asuntos públicos.

Hasta este momento se observa que el Frente Nacional que se había creado como respuesta a la violencia política generó nuevos malestares sociales, a la vez que mantuvo excluida a la oposición, profundizó el clientelismo de los partidos políticos tradicionales, garantizó la autonomía de los militares en el manejo del orden público y propició la agudización de problemáticas sociales de la mano con el abandono estatal a las periferias —algo que ha sido característico en diferentes periodos gubernamentales—.

Finalmente, este periodo terminó con una protesta social intimidada y reprimida bajo la reglamentación del estado de sitio que duró desde el 21 de febrero de 1971 hasta el 29 de diciembre de 1973, en el cual Pastrana prohibió manifestaciones, reuniones, desfiles políticos, protestas estudiantiles o laborales y actos cívicos (Archila, 2003, p. 105).

## **Nuevos movimientos sociales en Colombia (1975-1990)**

Este periodo estuvo marcado tanto por el desgaste del pacto bipartidista como por el fraude electoral del 19 de abril de 1970 (Narváez, 2012). Específicamente, en 1975 se levantó finalmente el estado de sitio, se otorgó personería jurídica a la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC) y a la Confederación General de Trabajadores (CGT), y el plan de desarrollo, social, económico y regional “Para Cerrar las Brechas” (1975-1978) proponía una política de austeridad fiscal y un paquete de reforma tributaria, educativa y política que, sin embargo, no avanzó sustancialmente (Archila, 2003, pp. 109-111).

A partir de esto, se observó un giro en el gobierno del “Mandato Claro”, a partir de la continuidad de las tendencias aperturistas —que dieron vía a la idea de convertir a Colombia en el “Japón de Suramérica”— y pretender conservar el orden bipartidista. En ese mismo año, la bonanza cafetera permitió una frágil contención de los primeros signos de recesión, y, durante este periodo, se manifestó el talante desarrollista de la propuesta del gobierno de López (Prada, 2002).

Por su parte, la ANUC también sufrió un fuerte impacto, debido a que desde 1974 se marcó una división que fraccionó al movimiento en tres tendencias que se pueden comprender desde la teoría de movilización de recursos: (1) la facción políticamente más radical del movimiento optó por la creación de la ANUC-UR, que propendía por la Unión Revolucionaria del sector campesino, en filiación con las guerrillas agrarias; (2) una segunda facción recurrió a una apuesta

socialdemócrata en la que no se renunciaba a las reivindicaciones sustantivas del movimiento, pero se negaba a optar por vías violentas y estableció la ruta del diálogo con la institucionalidad; y (3) una tercera facción pactó con el establecimiento y su cooptación institucional e intercambió su agenda política por cargos burocráticos.

En esa coyuntura, resulta importante señalar el paro nacional del 14 de septiembre de 1977. Fue un paro multitudinario, sobre todo en las grandes ciudades, que se dio contra el gobierno de López, pero que no se configuró como un movimiento insurreccional, sino como una protesta que se detonó por el alto costo de vida y por la arrogancia de López, que derivó en un enfrentamiento muy fuerte. En Bogotá se dieron saqueos de almacenes y un agitado clima social, sobre todo en los barrios de la periferia.

En ese momento se dio un periodo de fuerte conflictividad social, sin embargo, el régimen represivo de Turbay Ayala (1978-1982) impactó sobre el número de eventos y polarizó la sociedad, lo que dio lugar a la consolidación de las guerrillas de segunda generación. Mientras se acallaba la protesta popular y se perseguía la dirigencia social, los sectores más ortodoxos de la izquierda colombiana apuntaban a una insurrección por la vía armada. El gobierno de Belisario Betancur se caracterizó por ser dialogante, de ahí que la protesta encontró nuevos espacios de visibilización y repuntó a comienzos del gobierno de Virgilio Barco (1986-1990).

Por otra parte, en 1982 se creó la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) como proyecto nacional de concertación de múltiples y diversas organizaciones indígenas presentes en diferentes regiones con el fin de reclamar su defensa como pueblos indígenas y reivindicar sus derechos políticos, colectivos y culturales. Se consolidó orgánicamente a partir de un pliego que promovía la unidad de acción y se estructuró bajo los principios de unidad, tierra, cultura y autonomía. Además, se planteó una dirección respetuosa de las autoridades tradicionales y de los mayores de cada comunidad agremiada dentro de la organización.

Como parte de su agenda sustantiva, cabe resaltar las demandas en asuntos como tierras, cultura y educación, legislación indígena, salud, mejoramiento económico, organización política, autodeterminación, y articulación regional. Se trata de una organización referente del movimiento indígena, que a la par con el Cric ha permanecido como proyecto de largo plazo y ha participado activamente en múltiples procesos de movilización, interlocución institucional, vocería y denuncia en casos específicos de violación de derechos a los pueblos originarios.

De igual forma, en la década de los ochenta también comenzaron a aparecer distintas organizaciones de mujeres. Por ejemplo, surgió la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC); y se configuraron los movimientos feministas de nuevo tipo<sup>12</sup>, en donde se consolidó la agenda de género, la reivindicación de las mujeres por mayores espacios de participación y representación tanto en política como en el mundo del trabajo; y se promovió una agenda puntual de derechos civiles, políticos y económicos que apuntaba a mayor equidad, garantías paritarias y cambios culturales significativos.

Asimismo, aparecieron movimientos que promovieron el respeto y el reconocimiento de las diversidades sexuales. Durante la década del setenta ya había nacido el activismo gay, pero solo hasta el 28 de junio de 1982 se llevó a cabo la primera marcha denominada “Marcha del Orgullo Homosexual”, donde se visibilizó el movimiento de liberación homosexual creado por León Zuleta, y en la que se movilizaron 30 hombres desde la Plaza de Toros hasta el Parque de Las Nieves en la ciudad de Bogotá (Berrio, 2018, p. 24). De manera progresiva las otras diversidades iniciaron sus procesos de organización, en lo que iría consolidarse en los años noventa como LGBTI.

En ese mismo año, 1982, se organizó el Movimiento Nacional Cimarrón, que fue fundado en Buenaventura, Valle del Cauca, por el Círculo de Estudios de la Problemática de las Comunidades Afrocolombianas (SOWETO), el cual había surgido desde 1976 en Pereira, Risaralda. Estuvo integrado inicialmente por estudiantes procedentes de diferentes regiones del país, liderados por Juan de Dios Mosquera Mosquera. Tomaron como referentes las luchas afro en Estados Unidos y el influjo del movimiento Black Lives Matter, cuyo objetivo principal consistía en “eliminar la supremacía blanca”, y a la par retomaron la agenda de derechos civiles agenciada por Martin Luther King. El nombre *Cimarrón* evoca la heroica gesta protagonizada en América por los pueblos africanos, en su lucha por los derechos a la libertad, la dignidad e identidad africana, y en rebeldía contra el colonialismo esclavista europeo.

Luego de fundado el movimiento Cimarrón, empezaron a organizarse distintas asociaciones en el país. Una de las más representativas fue la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA), fundada en 1987, la cual estructuró una agenda programática que consistía en reivindicaciones de protección territorial y cultural, mejoramiento condiciones de vida, inicio de la división de trabajo interna

---

<sup>12</sup> Los primeros movimientos feministas surgieron en las décadas de los años 20 y 30 del siglo XX.

a nivel organizacional, autonomía, eliminación del racismo, preservar la identidad, proteger la biodiversidad, derechos sociales, y educación. Esta agenda fue replicada por otras organizaciones afro.

Ya en víspera de la asamblea constituyente de 1990, las demandas étnicas eran tomadas desde el referente indígena y mantenían la invisibilización del movimiento afro; de ahí que los líderes propusieran el “Telegrama Negro”, que consistía en hacer llegar mensajes a los constituyentes con la frase “los negros existimos”. Antes de realizar la asamblea se contaron más de 10 000 telegramas enviados a los distintos delegados. La presión política buscaba un espacio de reconocimiento para esta población, que quedó reducido al artículo transitorio 55 de la nueva carta política y regularizado en la Ley 70, que aún tiene vacíos normativos y problemas en su respectiva implementación. Aun así, se reconoce como un logro sustantivo para las comunidades del Pacífico, al reconocer títulos colectivos de territorios baldíos para las comunidades afrocolombianas y raizales. Sin embargo, esta ley dejó por fuera las comunidades afro del Cauca, el Valle, los Santanderes, los Llanos y la Costa Caribe.

Uno de los mayores picos de luchas sociales en este periodo se dio en 1987. Los nuevos movimientos sociales (De Sousa, 2001) se diversificaron a partir de la creación de distintos frentes políticos de los movimientos de izquierda y promovieron una “inusitada movilización en las regiones” (Archila, 2003, p. 159); por ejemplo, el Frente Democrático fue una expresión que en el Urabá antioqueño y en otras regiones del norte del país logró tener una presencia significativa. Fue un momento de auge de protestas sociales, de presión de reformas, y de proyección de la Asamblea Constituyente de 1990.

En este punto, no se afirma que la constituyente de 1991 signifique una creación única de la movilización social. Sería algo exagerado, dado que las fuerzas políticas más incidentes fueron el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), el Movimiento Armado 19 de abril, (M-19) y la facción del Ejército Popular de Liberación (EPL), grupos armados que se desmovilizaron en un contexto de apertura política y de transición legal a la contienda electoral<sup>13</sup>; pero, sin duda, los procesos de modernización política que acompañaron las democracias latinoamericanas generaron dinámicas propias en los movimientos sociales que derivaron en los fundamentos políticos de la nueva constitución, reformas políticas que consolidaron procesos de

---

<sup>13</sup> Para ampliar información referente a guerrillas de primera y segunda generación, así como a los procesos de desmovilización de estas últimas, véase Narváez (2013).

descentralización, de resolución por la vía concertada a los problemas cívicos regionales, y de reconocimiento a las distintas fuerzas de oposición.

Es importante destacar que para ese entonces el movimiento cívico y comunal había adquirido fuerza. Desde 1982 había estado en capacidad de promover paros cívicos regionales en Atlántico, Caldas, Cundinamarca y Antioquia, y hacía notar la “urbanización” progresiva de la protesta en Colombia (Archila et ál., 2019, p. 75). A pesar que las luchas sociales se expresaron en las ciudades, no significó que fueran por el derecho a la ciudad.

Como tendencias predominantes de este periodo se observa que se mantenía la tendencia tradicional, pues la mayoría de eventos de protesta del periodo aglutinaron pliegos laborales, incumplimientos de pactos, vivienda y servicios públicos.

Este periodo terminó en 1990, y entre los factores positivos más relevantes se observa el alcance de la articulación intersectorial en el Paro Nacional de 1977; sin embargo, entre los negativos se puso en evidencia la sistematicidad de la guerra sucia, el “ejercicio de la violencia explícita contra los dirigentes sociales [...], y el peso legal y cultural de la criminalización de la protesta” (Archila et ál., 2019, p. 63). En este periodo, el país pasó de ser más rural a ser urbano, de ahí que las demandas sociales se diversificaran y no quedaran reducidas a las agendas agrarias, obreras, estudiantiles o étnicas, sino que aparecieron demandas sociales estructuradas con enfoque de género, agenda ambiental y reivindicaciones concretas de orden civil, que se verían reflejadas en la necesidad de modernizar la carta constitucional y garantizar la apertura política que demandaban distintos sectores tanto sociales como políticos. La consigna general apuntaba hacia la necesidad de profundizar la democracia, tal como lo plantea Tilly (2004), pero que en el caso colombiano ha sido tan difícil de alcanzar a plenitud.

### **Fragmentación y crisis (1991-2010)**

Este periodo inició con los efectos políticos de la Nueva Constitución de 1991; no obstante, a pesar del contexto democrático que rodeaba el inicio de este ciclo, se tuvo una baja expresión de las luchas sociales en los años 1991 y 1992, “coyuntura en la que se esperaba una amplia movilización ciudadana para presionar la inclusión de demandas” (Archila et ál., 2019, p. 67).

Bajo el gobierno de César Gaviria (1990-1994) se incorporaron políticas económicas neoliberales que lesionaron de manera radical los intereses de los sectores populares, pues “se amplió la apertura comercial que afectó la actividad

económica interna y las relaciones laborales en el campo y la ciudad” (Archila et ál., 2019, p. 69) y se impactó negativamente a trabajadores asalariados y campesinos; aun así, no se observa una respuesta ciudadana inmediata, y las movilizaciones no se dieron sino hasta el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002).

El periodo de Ernesto Samper (1994-1998) pasó sin mayor confrontación social. La política nacional estaba concentrada en superar el escándalo del proceso 8000, que consistió en la constatación del ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña electoral (Archila et ál., 2019, p. 70).

En ese momento se recrudeció el conflicto en el campo colombiano, de ahí que la respuesta ciudadana se orientara en un primer momento al rechazo de la violencia. Se crearon comunidades de paz como la de San José de Apartadó, que nació el 23 de marzo de 1997 y surgió como alternativa humanizadora a la guerra y respuesta resiliente a dos masacres perpetradas en su territorio, en las que habían asesinado a los líderes de la comunidad. Por ello, se planteó una agenda basada en principios de libertad, diálogo transparente, respeto a la pluralidad, solidaridad, resistencia y justicia. Estas acciones se fueron replicando a lo largo del territorio nacional y significaron un respaldo al proceso de paz adelantado por Pastrana.

Más adelante, para 1999, se observa un auge de la protesta social, “en parte por la expectativa de los acuerdos de paz y de los intercambios humanitarios que de allí se derivan, y en parte por ser la primera vez que se discutía públicamente el Plan Nacional de Desarrollo” (Archila et ál., 2019, p. 70). El movimiento estudiantil logró consolidar articulaciones estratégicas programáticas; se realizaron distintas movilizaciones de orden nacional que respaldaban agendas campesinas, indígenas, obreras y urbanas; se constituyó la Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios, que tenía participación de estudiantes de universidades públicas; y se dio inicio al movimiento estudiantil de universidades privadas. El impacto de la política económica de Pastrana se sintió en la población urbana, pero también en el agro derivó en la movilización del sector campesino, pues en 1999 se creó el Consejo Nacional Campesino, y en el año 2000 se fundó la Coordinación de Cultivos de Coca y Amapola (COCCAM), organización que encabezó el paro nacional agropecuario del 31 de julio al 4 de agosto ese mismo año.

Bajo el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) se creó el Consejo Nacional Agrario y su agenda se concretó en el Mandato Agrario<sup>14</sup>. De manera

---

<sup>14</sup> El Mandato Agrario de 2003 se inscribe en las discusiones internacionales sobre los derechos de los campesinos que tuvieron lugar en décadas previas y que fueron la base de la Declaración de la Vía Campesina (VC) (Montenegro, 2016).

paradójica, las reclamaciones por la concentración de la tierra se fueron desplazando y en la agenda campesina se advirtió una lucha más por la inclusión ciudadana que por la redistribución de los baldíos o la titulación de las tierras (Archila et ál., 2019, p. 71).

Debido al incremento de la confrontación en el campo, dada la búsqueda de Uribe por derrotar militarmente a las FARC-EP, se produjo una reacción en el mundo social y político. Algunos partidos de izquierda que habían entrado en crisis desaparecieron y se generaron nuevas alianzas socio-políticas.

En el 2004 se generó una gran coalición en contra de un intento de reforma de la constitución que quiso hacer Uribe, una propuesta que reactivó las centrales sindicales junto con expresiones políticas, y se creó el partido Polo Democrático Alternativo que de cierta manera recogía en su momento diferentes corrientes sociales y políticas. También surgió la Alianza Social Indígena, y luego, más tarde, se creó la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y una serie de expresiones que dinamizaron mucho más el escenario político.

En 2007 ocurrió una serie de fenómenos importantes. Por un lado, la discusión sobre el sistema de participación de las regiones en el presupuesto nacional y el sistema nacional de regalías, y, por otro, la reacción del movimiento estudiantil respecto al ultimátum dado a las universidades públicas con el fin de que concurrieran en el pago de un porcentaje de la carga pensional, dado que en ese momento concurrir hubiera significado cerrar las universidades por imposibilidad de asumir el pasivo pensional con el presupuesto disponible. Asimismo, hubo una gran movilización de las víctimas de la violencia, especialmente de las mujeres, lo cual marcó la coyuntura del álgido 2007, que curiosamente rompió la tendencia que se ha venido observando, porque a pesar del autoritarismo de Uribe, se dio una mayor movilización ciudadana en su segundo gobierno (2006-2010). La explicación histórica a este fenómeno responde al agotamiento social respecto a la desmejora generalizada de las condiciones de vida de la población, así como al innegable impacto negativo de las reformas sociales que determinaron un futuro de incertidumbre y de limitación a los derechos básicos, como lo son el derecho a la salud, a la educación, a una vida digna, y a una pensión.

## **Articulación intersectorial y nuevas expresiones organizativas (2011-2021)**

Como consecuencia del periodo anterior se observó “una pérdida relativa de peso en la protesta de los asalariados y especialmente de los campesinos” (Archila

et ál., 2019, p. 71). El sector sindical se fue debilitando de manera progresiva como respuesta a los procesos de flexibilización laboral, y el campesinado, por su parte, se fue dividiendo y agotando en mesas de concertación regional que han estado destinadas a pactar sobre lo pactado y a visibilizar los incumplimientos y acordar nuevos plazos, que eventualmente dilatan de manera sustantiva las agendas propuestas.

Uno de los factores que explica la gran movilización de los paros agrarios del año 2013 y las 1031 protestas reconocidas en ese mismo año tuvo que ver con “la visibilidad del tema agrario en la negociación [con las FARC-EP], los tradicionales incumplimientos estatales, la resistencia ambiental y laboral a la ‘locomotora’ extractivista minero-energética y aún el mal manejo oficial de los conflictos, hasta el punto de negar su existencia” (Archila et ál., 2019, p. 72). De hecho, de esa época es popular la frase de Santos de “El tal paro nacional ¡No Existe!”.

El Paro Nacional Agrario y Popular se inició con una serie de movilizaciones y bloqueos en la región del Catatumbo, en los departamentos del Cauca, Antioquia y la Costa Caribe, y de manera progresiva el descontento se fue replicando a nivel nacional, hasta llegar al altiplano cundiboyacense y a la sabana de Bogotá; zonas que históricamente no se han caracterizado por procesos de movilización, ya que representan un campesinado más consolidado que el de las zonas de colonización. Aun así, estas poblaciones se expresaron de manera confrontante, sobre todo a través de las famosas “dignidades”: dignidad papera, dignidad sabanera, dignidad cafetera, entre otras. El paro nacional como tal se concretó en el mes de septiembre.

Posterior al Paro Nacional del 2013 se dio la Gran Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (Cacep)<sup>15</sup> en el año 2014, la cual, a pesar de negociar en medio de la desconfianza y el ausentismo estatal, se visibilizó como una articulación estratégica del campesinado y los sectores afro, raizales e indígenas, en consonancia con las expresiones urbanas populares que respaldaron la propuesta. La Cacep apostó por agendas aglutinantes más que por apuestas clasistas, y su agenda se diversificó, lo que a futuro tornó más exigente el escenario de un posible acuerdo. Específicamente, propuso:

---

<sup>15</sup> La CACEP es una coalición de organizaciones y procesos sociales locales, regionales y nacionales rurales y urbanos. Surgió en el marco del Paro Nacional Agrario de 2013 y recoge sus principales demandas y propuestas, además de otras reivindicaciones históricas, de los procesos organizativos que la integran (Montenegro, 2016).

Un proceso de ordenamiento territorial donde sean las comunidades quienes redefinan la manera como se organiza la producción, se distribuye el uso del suelo, se gobierna el subsuelo, y se protege al aire, el agua, los ecosistemas estratégicos y los medios de vida de las comunidades agrarias. (Cacep, 2014, como se citó en Montenegro, 2016, p. 183)

Cabe destacar que “el movimiento indígena ha sido un infatigable luchador por la tierra —ahora redefinida en términos de territorio—, la cultura, la autonomía” (Archila et ál., 2019, p. 73), pero sus apuestas programáticas se articularon cada vez más con la agenda ambiental que tiende a crecer, con la defensa de los bienes comunes de la humanidad y con las exigencias derivadas de los enfoques de género, así como con las demandas propias de las diversidades sexuales.

A la par, desde el año 2016 se han venido consolidando los movimientos de reconstrucción de la memoria de las víctimas, los movimientos en defensa del acuerdo de paz con las FARC, a la vez que se han reconocido nuevas resistencias organizadas y programáticas al modelo de sustitución de cultivos. De hecho, en los últimos años se ha observado un alto nivel en la confrontación movilizadora que responde al incremento represivo en la respuesta por parte de la fuerza pública.

En las diferentes manifestaciones que se llevaron a cabo el 21N se observó una altísima participación de jóvenes movilizados que acogen las agendas programáticas, las interiorizan y salen a reclamar sus derechos, como parte de un ejercicio de nuevas ciudadanía, activas e informadas, dado el impacto de las redes sociales y los diferentes canales de información alternativa.

De manera cíclica, los enfrentamientos ciudadanos se han incrementado como respuesta a los abusos de autoridad, que han derivado en múltiples asesinatos, como el del estudiante de secundaria Dylan Cruz a manos del Esmad el 25 de noviembre de 2019 mientras marchaba por el centro de la ciudad en busca de garantías para acceder a la educación superior en el marco de las protestas que habían sido convocadas el 21N; este hecho derivó en una respuesta cívica ciudadana importante en rechazo a tal acción.

Otro caso que también cabe destacar en esta línea es el asesinato de Javier Ordoñez en Bogotá el 8 de septiembre de 2020; se reconocen como implicados siete integrantes de la Policía Nacional que, haciendo un uso criminal de pistolas láser, de agresiones físicas y continuas torturas al interior de un CAI de la capital, lo llevaron a la muerte. Esto detonó en una respuesta violenta que rebasó la expresión propia de los movimientos sociales, pero que se tradujo en una expresión masiva de descontento popular. Al día siguiente, el 9 de septiembre, se

detonaron protestas violentas en distintas ciudades del país que derivaron en un elevado número de muertes<sup>16</sup>.

Estas acciones aún se mantienen impunes y en proceso de investigación, y no se pueden escudar en que “la capacidad del Estado supone procesos de monopolización de la fuerza, y de control de recursos, actividades y personas” (McAdam et ál. 2002, Huber, 1995, y Skocpol, 1985, como se citó en Velasco, 2006, p. 72), dado que fue evidente la violación de derechos humanos a la que se dio lugar, así como el nivel de negligencia institucional para clarificar los casos, señalar a los responsables e imputar los cargos específicos por los delitos cometidos en servicio activo de la institución. Aun así, y de acuerdo con el constructo teórico del presente artículo, se demuestra que estas expresiones son evidencia de protestas violentas que no logran configurarse como movimiento social, dada la inexistencia de agendas programáticas.

Finalmente, para el año 2021, el auge de la protesta social mostró incrementos relevantes, dados los inconformismos derivados de las reformas gubernamentales, el desacertado manejo de la crisis en materia de salud pública, así como el alto costo de vida y el desempleo que se generó a causa de las políticas sociales implementadas por el gobierno Duque (2018-2022), y también por las consecuencias de la pandemia mundial. Expresiones populares que fueron respondidas con un excesivo abuso del poder y de la violencia policial.

## Conclusiones

Es clave reiterar que “los movimientos sociales se inscriben en la dinámica de construcción de consensos y no de imposición por la fuerza” (Archila, 2003, p. 74). Asimismo, se deben diferenciar las acciones sociales colectivas contenciosas, en donde lo contencioso significa que son acciones de una cierta confrontación, pero no pensando en la confrontación armada, sino en lo que antes se denominaba acción directa extrainstitucional, lo cual tampoco indica que las protestas siempre sean extrainstitucionales, así sean violentas; se caracterizan por

---

<sup>16</sup> Murieron 13 personas en enfrentamientos con la fuerza pública, entre ellas un menor de edad; 403 personas quedaron heridas, entre ellas 194 policías; y se detuvieron más de 90 civiles que participaban en los disturbios desatados en Bogotá y otras ciudades a nivel nacional. Además, 60 Centros de Atención Inmediata de la policía (CAI) resultaron afectados y 91 vehículos resultaron destruidos, entre ellos 77 autobuses de transporte público, al igual que cinco bancos y tres establecimientos comerciales. Dada la magnitud de los hechos, las noticias fueron cubiertas por medios nacionales e internacionales. Aquí se retoma la noticia publicada por CNN (Silva, 2020).

ser contenciosas, por tener algún grado de conflictividad, generalmente con las autoridades o con un otro antagónico.

Por otra parte, se constató que entre 1919 y 1929 hubo una sucesión de huelgas y manifestaciones sociales, y que fue desde 1930 que se empezaron a tipificar como protestas sociales, según los niveles de visibilidad y organicidad de los distintos movimientos. En Colombia, los actores clásicos de las luchas sociales han sido los trabajadores —obreros— sindicalizados y los campesinos, aunque entre 1958 y 1990 fueron representados en un 33 % por el sector estudiantil.

Otro elemento que logra constatarse tiene que ver con la recurrencia de las problemáticas en materia de agro, incluidos el desplazamiento forzado, el conflicto armado, la violencia, el desempleo, la pobreza, el narcotráfico, la escasa participación política del campesinado, los problemas de titulación de tierras, la concentración de las tierras más productivas en pocas manos, y los impedimentos políticos-económicos a la industrialización del agro.

Respecto a los motivos de la protesta, se observa una transformación que queda expresada en los repertorios de la movilización, que va desde apuestas más materiales y macrosociales a motivos de orden político-cultural, donde han tomado lugar las agendas concernientes a garantías de derechos humanos, servicios sociales y respuestas normativas de orden sectorial. Esto no significa que Colombia haya pasado de ser un país de necesidades materiales a uno posmaterial, sino que el tema de la defensa de la vida, de la defensa de los derechos culturales, de las diferencias étnicas y de género, así como las reivindicaciones ambientales, se han vuelto prioritarios en la agenda social actual.

En la lucha social por departamentos se constató que Antioquia, Bogotá, Atlántico, Santander y Valle han tenido un protagonismo importante entre 1975 y 2015; en donde el factor poblacional ha tenido una gran importancia, pues es mucho más posible que haya protestas en Bogotá, con ocho millones de habitantes, que en Vaupés o el Guaviare. Con esto se responden entonces otros interrogantes correlacionados, como el de ¿por qué Bogotá recibe tantas protestas?: porque es la capital del país y las demandas requieren visibilizarse ante los centros del poder institucional (Archila et ál., 2019, p. 84). Aun así, en los últimos cuatro años se han presentado protestas en la periferia que han concentrado la atención nacional y han impactado la opinión pública dados sus efectos económicos, como han sido los distintos bloqueos ciudadanos al puerto de Buenaventura, desde el Paro Cívico de 2017 a la fecha.

Por otra parte, también se evidencia que en este mismo periodo “1025 municipios han participado, al menos, una vez en una lucha social, lo que equivale al 91.4 % de los municipios del país” (Archila et ál., 2019, p. 83), donde, luego de Bogotá, aparece Medellín como centro de luchas sociales. Antioquia ha sido un departamento con altos índices de conflictos sociales y de violencia, pero sorpresivamente aparece Bolívar y Santander en tercer y cuarto lugar, cuando se sabe que Valle o incluso Atlántico son más poblados, entonces, ¿qué pasa allí?, son factores que no limitan su explicación solamente al número de población, y se hallan dos núcleos explicativos históricos y espaciales de la protesta.

Una primera explicación responde a la teoría clásica de los movimientos sociales, donde hay concentración de recursos económicos, organizativos y políticos, y donde la protesta tiende a darse con más frecuencia; y la segunda, que la pobreza es un factor que puede impulsar la protesta, pero más que la pobreza es la percepción de una distribución inequitativa de los bienes, lo que puede configurar en el mundo rural y en el mundo popular un motivo moral de la protesta, comprendido como “economía moral de la multitud”. Aquellas regiones, ciudades y departamentos que concentran más recursos, no solamente económicos, sino organizativos, poseen mayores niveles educativos y estas son las áreas donde más protestas hay, y eso de alguna manera se refleja. A mayor educación, más conciencia y, por ello, más movilización.

Pero hay una segunda área de conflictividad reciente en Colombia, que se ha perfilado de los años 80 para acá, que son las zonas donde se da un círculo vicioso de creación de nuevas fuentes de riqueza y de apertura económica, que normalmente se asocia al extractivismo, sobre todo a los sectores minero-energéticos, petroleros, de explotación de gas, carbón, níquel u oro, o del extractivismo agrícola —palma africana, caña de azúcar—, que generan nuevas fuentes de riqueza y disputas por esos recursos. Esto no se da en áreas consolidadas como Bogotá, Medellín o Barranquilla, sino en zonas más pequeñas como, por ejemplo, Puerto Gaitán, donde se generan nuevas fuentes de recursos que conllevan a problemas sociales que derivan en procesos organizativos, con un fenómeno complejo adicional que es la conocida espiral de violencia-represión-violencia que termina produciendo mucha movilización, debido a que se protesta contra las malas decisiones o contra la misma violencia.

Zonas como el Magdalena Medio, el sur de Bolívar, el piedemonte Araucano y Casanare, el Caquetá o Putumayo han ido mostrando una evolución muy violenta; son regiones que fueron muy conflictivas en parte por este fenómeno. Además, se encuentran unos incumplimientos históricos que sustentan la acción colectiva de

los movimientos sociales de manera recurrente, lo que demuestra que las agendas sociales están por desarrollarse. Eso es algo que hoy es un imperativo en el país, sea quien sea el gobernante de turno, pues los movimientos sociales tienen unas agendas ya estructuradas, unas organizaciones reconocidas en términos de interlocución institucional, así como unos capitales culturales y sociales que inciden a la hora de negociar, que deben ser escuchados y respondidos en procura de la democracia.

Actualmente se observa que los movimientos sociales en general están respaldando el posacuerdo con las FARC y apuestan por la paz, porque además han sido las principales víctimas de la violencia, tanto de la violencia paramilitar como también de la guerrillera y estatal. Los líderes sociales, ya sean sindicalistas, indígenas, campesinos, afrocolombianos, mujeres, estudiantes, profesores, ambientalistas, líderes LGBTI, periodistas alternativos o defensores de DD. HH., han tenido que enfrentar hostigamientos, persecución e intimidación, y representan un fenómeno sistemático de asesinatos en el país. A la fecha van 1165 líderes sociales asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las FARC-EP en el año 2016<sup>17</sup>.

Asimismo, se observa en Colombia la emergencia de una nueva ciudadanía “más incluyente, defensora de la libertad y la igualdad, defensora de la diferencia en todo sentido” (Archila et ál., 2019, p. 87), que lucha por mejores condiciones sociales, culturales, económicas y políticas, que no son movimientos sociales proclives a formas autoritarias o a gobiernos militares, cerrados o restrictivos, sino que ellas mismas, con sus prácticas, están siendo más democráticas en su propia organización y demandan la misma condición por parte de su interlocutor, así sea su par o su otro antagónico. Se trata de “una ciudadanía que, cuando se moviliza reclama con autonomía creciente un reconocimiento de parte de sus adversarios y el derecho a tener derechos” (Archila et ál., 2019, p. 87); una nueva ciudadanía activa, agente y consciente del alcance de su acción colectiva, en procura de una democracia radical, consultiva y consensual (Mouffe, 1993), cuya estructura orgánica de movilización está posibilitando el diálogo social y el reconocimiento de diversos sistemas de adhesión a las agendas propuestas.

---

<sup>17</sup> A la fecha de escritura del presente documento (abril de 2021), y con base en cifras del Informe Especial de la Marcha Patriótica, la Cumbre Agraria Nacional e Indepaz, el consolidado de 2020 difundido por Indepaz (Indepaz, 2020; Indepaz et ál., 2020), y en los informes institucionales difundidos en el programa televisivo Pregunta Yamid (CM& la Noticia), emitido el 21 de abril de 2021, donde el Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, reconoció que van 52 asesinatos de líderes sociales durante el año 2021 (NotiCentro CM&, 2021).

Por otra parte, es de destacar que el impacto tecnológico es inminente, de ahí que se presenten grandes derrotas a futuro respecto al manejo óptimo que se logre dar en redes sociales, así como en los modos de difusión masiva de agendas de orden sustantivo tanto para afiliados con las causas sociales como hacia los sectores no movilizados, lo cual impactará la respuesta social, los lenguajes en que se divulgan las demandas, y el papel que asumen las ciudadanías activas.

Respecto a la dimensión espacio-temporal, es significativo que se descentre la visibilización de la protesta en Bogotá, y que se adviertan luchas sociales significativas en la periferia, lo cual posibilita el reposicionamiento de demandas locales relegadas históricamente y que ahora se hacen innegables, dada su visibilidad mediática, además del impacto de los mecanismos de control, que posibilitan no solo la sistematización de los acuerdos, sino también el monitoreo del cumplimiento de los mismos a partir de veedurías ciudadanas y de entes de control dispuestos para ello.

En cuanto a los métodos de lucha empleados, también se observan profundas transformaciones: de la huelga, el paro y las invasiones características de la década de los años setenta y ochenta (Archila et ál., 2019, p. 81), en los últimos años se ha privilegiado la movilización, el bloqueo de vías, las marchas, los plantones y las intervenciones culturales y artísticas en espacios públicos, otorgando mayor impacto y permanencia en la exposición de las reivindicaciones expresadas, lo que va de la mano con el mantenimiento de la acción de los movimientos sociales en el tiempo como fruto de tareas de mediano y largo plazo.

Las manifestaciones también han mutado, dado el impacto generado por la apropiación social del conocimiento por parte de las organizaciones sociales. Se reconocen a la fecha movilizaciones simbólicas y novedosas estrategias de visibilización de la memoria de las víctimas, a partir de apuestas museográficas, así como también creaciones colectivas que expresan indignación e inconformismo desde el universo musical, literario, escénico y el propio de las artes plásticas y visuales.

Entre los adversarios del movimiento social colombiano se encuentran de manera recurrente el ejecutivo nacional, el ejecutivo departamental, el ejecutivo municipal, la empresa privada y las empresas multinacionales; con una particularidad, en el periodo comprendido entre 1988 y 2007, cuando el adversario involucró de manera significativa a los grupos armados irregulares, fenómeno que se explica por el masivo rechazo a la violencia y las continuas manifestaciones en procura de la paz territorial (Archila et ál., 2019, p. 79).

Ahora bien, desde el influjo weberiano que se retoma en el presente estudio, cabe resaltar el sentido que se le otorga a la acción colectiva, en la actualidad las diferentes organizaciones sociales y los diferentes movimientos sociales logran una mayor ratificación de sus identidades, en el sentido de la especificidad que se le ha otorgado al proceso de diferenciación y de construcción de adversarios.

En esta línea, es importante clarificar la noción de adversario y la de enemigo. En el universo social se procuran prácticas conducentes a la negociación como expresión y materialización de acuerdos, mientras que en la guerra es donde se configura un enemigo a fin de aniquilarlo. A no ser que el país político comprenda la necesaria y permanente concertación con el otro adversario, y culturalmente comprenda el daño causado a partir de la estigmatización social que recae sobre la dirigencia, no se logrará parar el asesinato, la persecución y el hostigamiento a los líderes sociales.

Finalmente, cabe señalar que a nivel global las luchas sociales también se han venido diversificando y especificando, de ahí que se advierta la necesaria articulación mediante redes organizativas transnacionales, que implican reconfiguraciones de orden socio-estatal y supraestatal. A la par, se vislumbra una reconstrucción de causas organizativas, una reacomodación de modos de acción, así como una reelaboración permanente y cada vez más compleja de los repertorios de acción de los movimientos sociales, los cuales se están estructurando a partir de las nuevas formas de interpelar la institucionalidad y los dispositivos de poder, a la vez que fortalecen las resistencias activas y la agencia propositiva de las ciudadanías emergentes.

## Referencias

- Archila, M. (1991). *Cultura e Identidad Obrera: Colombia 1910-1945*. Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
- Archila, M. (2003). *Idas y Venidas, Vueltas y Revueltas. Protestas sociales en Colombia, 1958-1990*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
- Archila, M., García, M., Parra, L. y Restrepo, A. M. (2019). *Cuando la copa se rebosa. Luchas Sociales en Colombia, 1975-2015*. Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
- Aricapa, R. (2010, marzo 4). Se cumplen 90 años de la primera huelga de obreras en Colombia. *Agencia de Información Laboral*. <https://ail.ens.org.co/cronicas/se-cumplen-90-anos-la-primera-huelga-obreras-colombia/>
- Berrio, F. (2018). *Procesos de construcción y consolidación de acción colectiva, en personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, en San José del Guaviare (2015-2017)* (Tesis de grado). Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia. <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/12558>

- Consejo Regional Indígena del Cauca [Cric]. (1971). Documentos internos Consejo Regional Indígena del Cauca. <https://www.cric-colombia.org/portal/estructura-organizativa/origen-del-cric/>
- De Sousa Santos, B. (2001). Los nuevos movimientos sociales. *OSAL, Observatorio Social de América Latina*, (5), 177-188. [http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Los\\_nuevos\\_movimientos\\_sociales\\_OSAL\\_2001.PDF](http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Los_nuevos_movimientos_sociales_OSAL_2001.PDF)
- Escobar, A. (2010). *Territorios de diferencia: Lugar, movimientos, vidas, redes*. Envién Editores.
- Gamson, W. y Meyer, D. (1999). Marcos interpretativos de la oportunidad política. En McAdam, McCarthy y Zald (Comps.), *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*. Itsmo.
- García Linera, Á. (2010). *Sociología de los Movimientos Sociales en Bolivia Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política*. Plural Editores.
- Garretón, M. A. (1996). Movimientos sociales y procesos de democratización. Un marco analítico. *Excerpta*, (2). [http://www.archivochile.com/Mov\\_sociales/Doc\\_gen/MSdocgen0010.pdf](http://www.archivochile.com/Mov_sociales/Doc_gen/MSdocgen0010.pdf)
- González, R. y Molineras, R. (2013) Movimiento obrero y protesta social en Colombia. 1920-1950. *Historia Caribe*, 8(22), 167-193. <https://biblat.unam.mx/hevila/Historiacaribe/2013/vol8/no22/6.pdf>
- Indepaz. (2020, diciembre 31). El año 2020 cierra con más de 300 líderes sociales asesinados en Colombia. *Listin Diario*. <https://listindiario.com/las-mundiales/2020/12/31/650522/el-ano-2020-cierra-con-mas-de-300-lideres-sociales-asesinados-en-colombia>
- Indepaz, Cumbre Agraria y Marcha Patriótica. (2020). Informe Especial: Registro de líderes y personas defensoras de DDHH asesinadas desde la firma del acuerdo de paz. <https://listindiario.com/las-mundiales/2020/12/31/650522/el-ano-2020-cierra-con-mas-de-300-lideres-sociales-asesinados-en-colombia>
- Melucci, A. (1989). *Nomads of the present. Social Movements an Individual Needs in Contemporary Society*. Hutchinson.
- Montenegro, H. (2016). Ampliaciones y quiebres del reconocimiento político del campesinado colombiano. Un análisis a la luz de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (Cacep). *Revista Colombiana de Antropología*, 52(1), 169-195. <https://doi.org/10.22380/2539472X7>
- Mouffe, C. (1993). *The Return of the Political*. Verso.
- Narváez, G. (2012). *La Guerra Revolucionaria del M-19 (1974-1989)* [Tesis de maestría]. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/12242>
- Narváez, G. (2013). Análisis de los procesos de paz en Colombia, en los inicios de la década de los noventa. Lecciones de El Salvador. *Revista Criterios*, 7(2), 43-90, <https://doi.org/10.21500/20115733.2571>
- NotiCentro CM&. (2021, abril 21). *Pregunta Yamid: Emilio Archila, consejero Presidencial para la estabilización* [Archivo de video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=ZD37jTwSCi4>

- Peñaranda, R. (2015). *Guerra propia, guerra ajena. Conflictos armados y reconstrucción identitaria en los Andes colombianos. El Movimiento Armado Quintín Lame*. Centro Nacional de Memoria Histórica, Universidad Nacional de Colombia.  
<https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/quintinLame/quintin-lame-conflictos-armados-y-reconstruccion-identitaria-en-los-andes-colombianos.pdf>
- Prada, E. (2002). Luchas campesinas e indígenas. En M. Archila, A. Delgado, M. C. García y E. Prada (Eds.), *25 años de luchas sociales en Colombia: 1975-2000* (pp. 121-166). Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
- Revilla, M. (1996). El concepto de movimiento social: acción, identidad y sentido. *Última década*, (5), 1-18. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19500501>
- Silva, D. (2020, septiembre 11). 13 civiles muertos y más de 400 heridos en dos días de protestas en Colombia por la muerte de Javier Ordóñez. *CNN en español*.  
<https://cnnespanol.cnn.com/2020/09/11/10-civiles-muertos-y-mas-de-400-heridos-en-dos-dias-de-protestas-en-colombia-por-la-muerte-de-javier-ordonez/>
- Tarrow, S. (1998). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Alianza Editorial.
- Tilly, C. (1997). *Roads from Past to Future*. Rowman and Littlefield.
- Tilly, C. (2004). *Social Movements, 1768-2004*. Paradigm Publishers.
- Touraine, A. (2006). Los movimientos sociales. *Revista Colombiana de Sociología*, (27), 255-278.  
<https://revistas.unal.edu.co/index.php/recs/article/view/7982>
- UN Análisis (2020, marzo 19). 100 años de las huelgas obreras en Colombia [Programa de radio]. *UN Análisis*. <https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/100-anos-de-las-huelgas-obreras-en-colombia/>
- Velasco, M. (2006). Cambio institucional y protesta social en Colombia 1964-2000: análisis de series de tiempo. *Revista Colombia Internacional*, (63), 70-87.  
<https://doi.org/10.7440/colombiaint63.2006.03>
- Weber, M. (1978). *Economy and Society*. University of California.